

Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Najera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—E. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 28 de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Michoacan, contra D. Antonio Espinosa y D. Francisco Lopez Páramo, por el delito de peculado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez suplente de Distrito.

Elevada la presente causa ó plenario, se los hizo á los procesados D. Antonio Espinosa y D. Francisco Lopez Páramo el correspondiente cargo de peculado, fundándose este en los hechos que á continuacion se expresan:

Haber aparecido un faltante de \$ 148 22 cents. en el reconocimiento practicado el 18 de Setiembre del año próximo anterior por ese Juzgado, y que ascendió á la cantidad de \$373 segun el estado comparativo presentado por el C. Gefe de Hacienda; haber resultado un deficiente de \$150 en el corte de caja que se practicó el dia 20 por el empleado encargado de la Gefatura, y por disposicion del C. Juez propietario; haber desaparecido de la caja, el libramiento de \$150 de D. Antonio Carranza, al hacerse por los responsables la entrega de la oficina al Administrador interino, siendo así que tal documento había figurado en los cortes anteriores; y por último, haber adelantado sueldos tanto al ex-administrador Espinosa, como al cartero Emigdio Herrera

Los reos, para destruir el cargo en sus expresados fundamentos, hicieron extensas explicaciones en el momento de la confesion, y presentaron algunas pruebas durante el término que se les concedió para ello.

En estado ya el proceso, pasó este Ministerio á examinar con el detenimiento debido, tanto las razones alegadas por los reos en su defensa, como los justificantes que produjeron con el mismo objeto.

V. pues, C. Juez, se servirá tener á bien que el Promotor que suscribe recorra con toda la atencion que el caso demanda, las constancias procesales, á fin de que no por una ligereza ó una perjudicial brevedad, queden sin defensa los sagrados intereses que le están encomendados por virtud de su alto Ministerio, ni tampoco en contraposicion, quede injustamente vulnerada la reputacion de unos empleados, en cuya justificacion está interesado el buen nombre de una de las oficinas de la Federacion en este Estado.

Mas antes de entrar al fondo de la cuestion, es conveniente recorrer de una ojeada la historia de este negocio, cuyos antecedentes son de una importancia vital en el asunto.

A instancia del mismo ex-administrador D. Antonio Espinosa, se instruyeron en ese Juzgado unas diligencias con el objeto de averiguar el robo de unos sellos que remitian las subalternas de Zacapu, Erongaricuaro y Quiroga.

En dichas diligencias apareció plenamente comprobado, que al venir la diligencia de Pátzcuaro, en el punto denominado la *Verdolaga* fué asaltada por unos bandidos, quienes despojaron á los pasajeros y robaron la baliya donde venian los sellos remitidos por dichas administraciones.

Habiéndose practicado cuantas diligencias fueron del caso para averiguar la verdad de los sucesos, el Promotor que suscribe, con vista de todos los datos, formuló su pedimento respectivo, pretendiendo se declarase por el Juzgado estar plenamente

comprobados los hechos, para los efectos de la circular de 10 de Mayo de 1867.

En este estado de cosas, el C. Juez propietario creyó conveniente practicar una diligencia de reconocimiento en la Administracion principal, haciendo un corte de caja en los términos que ella previene, con motivo del robo de los sellos que se verificó en el rancho de la *Verdolaga*, al ser capturada la baliya de Pátzcuaro, donde, como se ha dicho, venian los sellos remitidos por las subalternas de Quiroga, Erongarícuaro y Zacapu.

Hubo la coincidencia, que en aquellos momentos el administrador D. Antonio Espinosa se encontraba ausente, por virtud de una licencia que le concedió la Administracion general, á fin de que fuese á Tacámbaro á asuntos particulares.

En consecuencia, el C. Juez tuvo que entenderse con el interventor D. Francisco Lopez Páramo, quien estaba transitoriamente encargado de la oficina, por virtud de la confianza que hizo de su persona el administrador Espinosa, pues este quedó siempre oficialmente responsable de la oficina de correos, con motivo de que con tal condicion fué concedida la licencia relacionada por la Administracion general.

El interventor se manifestó sorprendido de que el C. Juez fuese á practicar tal diligencia en la Administracion principal por virtud del robo de los sellos remitidos por los subalternos de Erongarícuaro, etc; pretendiendo fundar su sorpresa, en que no siendo de la Administracion principal la robada, porque aun no recibia los sellos que se le remitían, ni era ya la remitente; en último caso, las que se podrian decir robadas, y en las cuales se tendria que practicar la diligencia á que se contrae la circular citada, serian las administraciones que hacian la remision de que se ha hecho mérito.

Por otra parte; como el responsable directo de la oficina lo era el administrador D. Antonio Espinosa, y no el interventor, pues este se encontraba encargado de aque-

lla de una manera confidencial, manifestó dicho empleado que él no podia consentir en la práctica de la diligencia, porque no habia en su concepto motivo fundado para ello; y en consecuencia creia, que el C. Juez obraba fuera de la órbita de sus facultades, y ademas, porque no se encontraba presente el Administrador, que como responsable oficial, debería estar presente, tanto para que pudiera ministrar al mismo funcionario judicial los datos que necesitaba para llenar el objeto de la diligencia que se trataba de practicar, como porque no por falta de datos fuera á recaer sobre la oficina un cargo que perjudicase al honor de sus empleados.

Por tales motivos, el interventor se manifestó resistente; mas como lo hizo de una manera respetuosa, segun consta del sumario, y los motivos que le impelieron para ello, si no fueron completamente satisfactorios, tampoco lo fueron irracionales, este Ministerio no pidió se le hiciera cargo alguno por ello, ni el C. Juez propietario se lo hizo tampoco al recibirle su confesion, pues sin duda dió igual apreciacion á la actitud del interventor.

La diligencia se practicó, pues, por el Juzgado, con los datos que se pudieron tener á la mano, dando un resultado imperfecto, ocasionado por la ausencia del administrador, quien como no estuvo presente, no pudo dar al Juez explicaciones importantes respecto de puntos de alto interés en el asunto.

El corte de caja de que habla la circular de 10 de Mayo de 1867, y que fué el punto objetivo del Juzgado al acercarse á la oficina de correos, no se ejecutó por fin; quedando los libros abiertos y el despacho en su curso ordinario.

Mas en el reconocimiento que hizo el Juzgado, apareció un faltante de \$148.22, segun se ha visto al principio; é interpelado el interventor para que explicase el por que del deficiente, se remitió al administrador,

quien en su concepto tenía que contestar sobre este punto.

Habiendo llegado á los dos días el administrador Espinosa, é interpelado sobre el particular, manifestó que el deficiente no existía, porque el dinero estaba en la misma Administración, aunque en otro lugar fuera de la caja, á donde había creído prudente trasportarlo, en virtud de que habiendo quedado la oficina bajo su mas estrecha responsabilidad, y corriendo rumores alarmantes acerca de un alzamiento popular provocado por algunos revoltosos, no creyó prudente dejar en lugar conocido del público todas las existencias de la caja, á efecto de que no peligrasen; impeliéndole por último á obrar así, la consideracion de que la oficina de correos está sin ningun resguardo, la pieza donde se halla la caja se encuentra inmediata á la calle, y no hay personas que se queden á dormir de noche en la pieza referida, pues los departamentos de su asistencia están retirados.

El Administrador confesó, pues, que en la caja no existía la cantidad en que se hizo consistir el faltante referido: hubo en consecuencia extracion de fondos; pero tal extracion ¿debe reputarse criminal? ¿importa ella por sí sola un peculado?

El Código penal vigente hoy entre nosotros, define así este delito:

“Peculado.—Artículo 1026.—Comete el delito de peculado, toda persona encargada de un servicio público, aunque sea su comision por tiempo limitado y no tenga el caracter de funcionario, que para usos privados propios ó ajenos, distraiga de su objeto dolosamente el dinero, valores, fincas ó cualquiera otra cosa perteneciente á la Nación, etc.”

Segun el texto expreso de este artículo, se necesita para la existencia del *peculado*, sustraccion dolosa de los bienes de la Nación para usos propios ó ajenos, estraños al objeto á que están destinados aquellos.

A este respecto dice el mismo Código en su artículo noveno: Siempre que á un acu-

sado se le pruebe que violó una ley penal, se presumirá que obró con dolo, á no ser que se averigüe lo contrario, ó que la ley exija la intencion dolosa para que haya delito.”

Ahora bien: la sustraccion en el caso presente ¿fué dolosa?

A ser verdaderos los asertos del ex-administrador D. Antonio Espinosa, evidentemente que no: pues antes bien, su conducta tendria que calificarse de plausible, puesto que trataba de salvar de un robo, los fondos de la oficina, y no de distraerlos de su objeto.

Mas los conceptos del ex-administrador Espinosa ¿están probados en la causa?

El interventor D. Francisco Lopez Páramo, declara favorablemente en este sentido; pero como es coodelincuente, su testimonio no hace fé, segun las prescripciones del derecho.

El C. visitador Enrique Arce, no declara constarle de vista que Espinosa tenía efectivamente guardada la cantidad de que se trata, en lugar determinado con el objeto que se alega; y por otra parte, es testigo singular, y bien sabido es en derecho que los testigos singulares no hacen prueba plena.

Ademas: aun cuando este hecho estuviera satisfactoriamente justificado, no favorecería á los reos: porque no se trata de saber si los fondos existian fuera de la caja en otro lugar, sino si al extraerlos de ella el administrador Espinosa, lo hizo con objeto de apropiárselos, de distraerlos para su uso propio ó ajeno, del fin para el que los destina la ley. La inocencia ó malicia, la inculpabilidad ó el dolo, deben buscarse en el momento de la extraccion del dinero de la caja, no en el de la devolucion: porque si la extraccion fué con objeto lícito, el reintegro de ellos ó su vuelta á la caja, deberá de ser lícito tambien; y si la extraccion fué maliciosa, la devolucion no quitará el delito, sino que lo atenuará únicamente.

El punto controvertible debe ser colocado, pues, en este terreno: ¿hubo dolo por

parte de D. Antonio Espinosa al extraer de la caja el dinero de que trata, ó lo hizo con objeto ilícito, y en consecuencia punible?

Durante el sumario no pudo averiguarse por el C. Juez que conocía de la causa la existencia del dolo por parte de Espinosa al verificar la extracción mencionada, ni durante el plenario le fué posible á este Ministerio rendir prueba alguna sobre este punto, puesto que el artículo noveno le imponía el deber de probar el dolo, en virtud de que según el texto del 1,026 se exigió la intención dolosa para la existencia del peculado.

Tal prueba le fué á este Ministerio no solamente difícil, sino hasta imposible; porque imposible era comprobar la intención que tuvo el autor de la extracción al verificarla, puesto que á nadie le es dado leer las intenciones ocultas de los demás.

Habría un medio de probar el dolo, si hubiera este revelándose en hechos externos; esto es, si se hubiera podido investigar la inversión que el autor de la extracción le hubiera dado á los fondos referidos; mas esto no le fué posible investigar ni al C. Juez que formó el sumario, ni tampoco á este Ministerio.

Examinando ahora las razones que alega en su defensa el acusado para comprobar la falta de dolo, y en consecuencia lo lícito y aun plausible de la extracción, ocurre preguntar: ¿existían efectivamente los temores de un trastorno público en aquella fecha, como lo manifiesta el acusado?

Los CC. redactores del periódico intitulado el Voto Libre, entre los cuales se encuentra el mismo C. Juez propietario, así como otras personas muy respetables, así lo aseguran en el párrafo intitulado: "sueño peligroso."

Ahora bien, como el acerto de los ciudadanos redactores del Voto es atendible por virtud de la calidad de las personas; como los hechos á que se refieren fueron notorios y públicos, pues á todos nos consta la inquietud que ha existido en el pueblo desde los funestos acontecimientos de los

TOMO IV.—PARTE II.

días 5 y 6 de Agosto de 1871; como efectivamente se temía entonces un trastorno semejante, y es notorio además que la oficina de correos está sin ningún resguardo, que la pieza donde se encuentra la caja da hacia la calle, y en caso de un trastorno público era fácil que los revoltosos pudiesen cometer un atentado en dicha administración; y en consecuencia, puede muy bien ser creíble, que haya efectivamente procurado poner en otro lugar menos inseguro los caudales que estaban á su cargo y bajo su responsabilidad inmediata.

Por otra parte: puesto que en el acto que el ex-administrador llegó de Tacámbaro, manifestó al C. Visitador la cantidad de que se le hacía cargo, y la entregó al interventor, no con el carácter de devolución, sino con el de íntegro á la caja, es de creerse que no había hecho la extracción para usos propios ó ajenos, puesto que en ese caso ya habría estado invertida en los objetos para que había sido extraída.

Exigiéndose, pues, por la ley, la prueba del dolo para calificar de peculado la extracción de que se trata, no habiéndose podido averiguar aquel durante el sumario, ni probarlo este Ministerio durante el plenario; no apareciendo que la cantidad en cuestión haya sido distraída en usos extraños á su objeto, puesto que existía íntegra y fué presentada por el ex-administrador Espinosa en el acto que llegó de Tacámbaro; puesto que la razón que da dicho responsable de haber transportado el dinero de que se trata á otro lugar, lejos de ser punible, es laudable, puesto que así manifestó un celo especial por la salvación de aquel, y siendo que los recelos que le determinaron á obrar así aparecen fundados, por ser efectivamente cierto que en esos días se auguraba un trastorno popular, y ser en fin un hecho público y notorio que la oficina de correos no tiene resguardo alguno, que la pieza donde se encuentra la caja está inmediata á la calle, y era fácil que, verificado un trastorno, fuesen robados los caudales de

correos, este Ministerio, fundado en tales considerandos, entiende que no puede darse el carácter de peculado al deficiente que apareció en la diligencia practicada el 18 de Setiembre, y que, por lo mismo, es de absolverse á los procesados del cargo, por lo que ve á este primer fundamento.

Mas no puede decirse lo mismo respecto al adelanto de sueldos hechos al mismo Espinosa y al cartero Emigdio Herrera, porque tal circunstancia sí constituye un abuso, que declara punible el art. 200 del reglamento general de 20 de Julio de 1831, que en lo conducente dice á la letra: "Tampoco podrá hacerse préstamo con los caudales del erario, anticipar sueldos, ó usar aquellos para asuntos ajenos del servicio, quedando sujetos los responsables, si llegare á averiguarse aquel abuso, á las penas que han dispuesto las leyes para semejantes casos."

Segun se ve del texto expreso del artículo anterior, el hecho de anticipar sueldos, si bien no constituye un peculado, puesto que anticipar sueldos á los empleados en actual servicio no es distraer de su objeto los caudales del erario, porque uno de los objetos de su inversion es precisamente el pago de aquellos, sí es un abuso que debe ser castigado segun las circunstancias de caso.

Aquí puede reputarse atenuante, segun las determinaciones del Código penal, la circunstancia de haber devuelto Espinosa la cantidad que se habia adelantado, segun aparece en la causa.

Siendo, pues, un abuso y un peculado el anticipo de sueldos, el Promotor cree que no puede reputarse como fundamento del cargo el hecho referido, aun cuando debe imponerse una pena tanto al Administrador Espinosa como al interventor Páramo, en virtud de que la responsabilidad de ambos empleados es solidaria segun la previenen las ordenanzas del ramo.

Al tratarse del corte de caja verificado el dia 20 del mismo mes de Setiembre, aun cuando no aparece deficiente alguno en el

extracto suscrito por el C. Manuel Ortiz Ayala, como empleado encargado de la Gefatura; sí aparece un faltante de \$150 en el cuadro comparativo que se presentó despues por el C. Gefe de Hacienda, cuyo faltante provino de haberse reputado inadmisibile como documento de data, la libranza suscrita por el C. Administrador de Cotija, Antonio Carranza.

Este Ministerio encontraria hoy en este deficiente una prueba robusta del peculado por el que se persigue á los procesados de esta causa, si en el acto de practicarse el corte por dicho empleado hubiera repelido tal documento, hubiera exigido que se le presentase dinero efectivo ó valor admisible, y los responsables no hubieran desde luego cubierto la data de esa manera satisfactoria; mas como tal repulsion se vino á hacer hasta cuando se formó por el C. Gefe de Hacienda el cuadro comparativo, de que antes se ha hablado, y ya en aquella fecha se habia verificado la entrega de la oficina al Administrador interino, y entonces la caja, lejos de estar en descubierto, presentaba un estado satisfactorio, no puede hoy encontrar este Ministerio una prueba concluyente del peculado en el resultado que dió el corte de caja del dia 20, porque entonces, segun aparece del proceso, no apareció faltante alguno, el cual vino á determinarse hasta el dia 12 de Noviembre en que se firmó el cuadro comparativo, y en esa fecha la caja no estaba en deficiente á juzgar por el corte de entrega y por el estado comparativo de la Gefatura.

Se presume que en el intervalo del dia 20 al 26, se cubrió la caja por los responsables con dinero y de una manera maliciosa; mas esta presuncion no pudo elevarse al rango de prueba por el C. Juez en el sumario, ni á este Ministerio le fué posible corroborarlo en el plenario.

Los responsables manifiestan que el dinero existía en la caja el dia 20, de lo cual se habria satisfecho el empleado encargado de la Gefatura si se hubiera accionado á la

caja, y si no lo presentaron fué porque habiendo dado aquel por cubierta la data de la manera que aparece en el estado corte de caja de ese día, dejaron aquel dinero sobrante como en depósito, ya para exhibirlo si se repelía la libranza de Cotija, ya para conservarlo á la orden de la Administración relacionada, ó datarlo á la cuenta de aquella subalterna, si el referido libramiento era definitivamente aceptado como bueno, con el carácter que se le dió en dicho corte.

El hecho de existir en la caja el dinero referido, no está probado en manera alguna, sino es de una manera indirecta, pues sobre este particular han pretendido probar los responsables que no llegó el empleado encargado de la Gefatura á acercarse á la caja, y no pudo cerciorarse por lo mismo si existía ó no algún dinero en ella.

Hay, pues, sobre este punto dos presunciones: una contraria á los reos, y es de la que se ha hecho referencia al principio, y otra favorable que consiste en entender que efectivamente existía el dinero en caja, puesto que al verificarse la entrega de la oficina, no apareció descubierta de ninguna especie, aun separada la libranza de Cotija, y antes bien resultó un alcance á favor del ex-administrador Espinosa.

V. C. Juez, al examinar este punto, se servirá valorizar, tanto una como otra presuncion y decidir en este particular lo que sea de justicia.

Al hacerse la entrega de la oficina el día 26, no apareció descubierto alguno, y en el cuadro comparativo presentado por el C. Gefe de Hacienda, se ve igualado el cargo con la data.

Mas en esta época se hace notar la desaparicion de la libranza de Cotija, de que antes se ha hablado.

Tal libramiento, dicen los responsables, era un vale á cobrar, cuyo pago no se habia conseguido aun, por cuya virtud fué repelido por el C. Gefe de Hacienda al formar el estado comparativo; y supuesto tal carácter del documento referido, muy natu-

ral era devolverlo á la persona que lo habia remitido en comision, como efectivamente fué devuelto.

Siendo, pues, que tal documento no se consideró como de data, aun por la misma Gefatura de Hacienda; que su valor no estaba cargado en los libros de la oficina y que tenía el carácter de vale á cobrar, en comision de la oficina de Cotija; la desaparicion de tal libranza en el corte de entrega, puede considerarse como natural y no punible, y tanto mas cuanto que se devolvió este documento á D. Antonio Carranza, de Cotija que era su procedencia.

Si la referida libranza hubiera sido un valor perteneciente á la oficina, la cual se hubiera hecho cargo de ella, se habria entonces admitido como buen documento de data como lo era de cargo; y si los responsables se hubieran apropiado de ese valor para usos propios ó extraños al objeto á que los destina la ley, podría este Ministerio reputar un robo la desaparicion de la supradicha libranza, un verdadero peculado.

Mas no habiendo sido así, sino antes bien, resultando que el libramiento de Cotija era un vale á cobrar que no pertenecía á la oficina, y que por tal razon fué devuelto á la persona que lo remitió en comision, muy natural y admisible parece ser la desaparicion de aquel documento al verificarse el corte de caja para entregar la oficina á los nuevos empleados.

Peró al llegar á este punto, salta desde luego esta reflexion: si es que el libramiento de D. Antonio Carranza, de Cotija, era un vale á cobrar, cómo se hizo entonces figurar en el corte del día 20 como documento de data?

Esta reflexion traería desde luego el convencimiento del delito de peculado contra los reos, y en ella encontraria una prueba concluyente este Ministerio para pedir se pronunciase un fallo condenatorio, si no fuera porque al tocar este punto, hay que retroceder al examen de los sucesos del día 20, y vuelve á decirse en consecuencia: si

el empleado de la Gefatura encargado de practicar el corte de esa fecha, hubiera repelido inmediatamente la libranza de Cotija; hubiera exigido á los responsables exhibieran en efectivo el valor de aquella partida y aquellos no lo hubieran hecho; si se hubiera acercado á la caja y no hubiera encontrado en ella ninguna existencia en dinero, desde luego que el peculado hubiera sido descubierto, y hoy no habria duda alguna respecto de ellos.

Mas todavía, si en vez de adoptar en la operacion el órden inverso que parece observó respecto del que siguieron las personas que intervinieron en el corte de entrega, es decir, si hubiera comenzado por las existencias de la caja, y despues para completar la data hubiera considerado los documentos verdaderamente admisibles, y en fin, al tratarse de la presentacion de la libranza de Cotija se hubiera cerciorado si estaba cargada en los libros para reputarla en el descargo, no habria hoy mas que pedir para confundir á los reos con el peso irresistible de los hechos.

Pero dicho empleado, no obrando así, sino que comenzando por la consideracion de los documentos y admitiéndolos en el descargo de la manera que se vé en el estado corte de caja del dia 20, y concluyendo por completar la data con la cantidad que se necesitó nada mas para ello, dió lugar á que hoy los responsables aleguen que la cantidad correspondiente al valor de la libranza de Cotija, que ya estaba considerada entre los documentos admisibles, existía en caja, tanto que por eso resultó enteramente cubierta esta en el corte de entrega, á pesar de haberse separado entonces el libramiento en cuestion, y que digan, por último, que si en el corte del dia 20 se hubiera procedido como en el del dia 26, el resultado habria sido el mismo, puesto que existian los mismos valores.

No se crea aquí que este Ministerio, al hacer estas reflexiones, pretende inculpar al empleado de la Gefatura por haber obser-

vado en el corte de caja del dia 20 el órden que adoptó para verificar la operacion, ni que le eche en cara ignorancia ó malicia por haber procedido de la manera que lo hizo: no, el modo con que dicho empleado practicó el corte fué bueno; mas para los efectos que hoy se tratan de investigar, habria sido mejor que se hubiera procedido de la manera que se hizo el dia 26.

Pasando ahora á examinar otros puntos, aparece: que por lo que vé á la cantidad remitida de Tacámbaro, está probado que, aun cuando ella fué de ochenta pesos, solamente se acreditaron setenta y nueve en virtud de que un peso fué devuelto por no considerársele buena moneda.

En cuanto á la cantidad exhibida por el C. pagador Peimbert, está suficientemente aclarado ese punto en las actuaciones, y no resultando culpabilidad alguna contra los procesados, este Ministerio no tiene objecion que hacer en su contra.

Por último, con las pruebas rendidas por los reos durante el plenario, están determinados los hechos concernientes á la cantidad que hace referencia á D. Gustavo Gravenhorst, con cuyas pruebas resultan justificados los responsables.

Reasumiendo pues, todos los puntos que se han tocado en este alegato, aparece: que es de absolverse á D. Antonio Espinosa y á D. Francisco López Páramo del cargo de peculado que se les hizo, en virtud, primeramente, de que el deficiente que apareció en el reconocimiento practicado por el C. Juez propietario, no llegó á existir verdaderamente, puesto que el dinero existía en la misma Administracion, aunque en otro lugar fuera de la caja, á donde creyó conveniente trasportarlo para mayor seguridad el Gefe de la oficina, con motivo de los temores que existian respecto á un trastorno popular en aquella epoca, y de estar sin ningun resguardo la casa de correos, en la cual se encuentra próxima á la calle la pica donde esta situada la caja; en segundo lugar, de que el anticipo de sueldos, si bien

es abuso, según el texto expreso del artículo 200 del reglamento general de 20 de Julio de 1831, no constituye un peculado, ni el Código penal vigente hoy entre nosotros, considera como tal delito el caso de que se trata; en tercer lugar, de que en el corte verificado el día 20 del mismo Setiembre no apareció faltante alguno; y cuando se vino á hacer consistir por la segregación de la libranza de Cotija, fué cuando el C. Geefe de Hacienda formó el estado comparativo, y entonces ya se habia verificado la entrega de la Administración de correos, en cuyo corte respectivo la caja no presentó ningun descubierto, y antes bien hubo un alcance á favor del Administrador responsable; en cuarto lugar, que la desaparición del libramiento del Sr. Carranza en el corte de entrega, resultó ser un hecho natural, en virtud de que, teniendo el carácter de un vale á cobrar en comisión del Administrador de Cotija y no habiendo satisfecho el aceptante, fué preciso devolverlo, como consta que se devolvió en efecto; en quinto lugar, de que el reintegro que se supone que hicieron los responsables á la caja en el intervalo del día 20 al 26, ni pudo investigarlo el C. Juez en el sumario, ni pudo probarlo este Ministerio en el plenario, razón por la que tal hecho ha quedado con el carácter de presunción, que V. al fallar se servirá estimarlo en justicia; y en sexto lugar, de que no apareció por fin culpabilidad alguna contra los procesados, por lo concerniente á la cantidad remitida por el Administrador de Tacámbaro, á la exhibida por el Sr. Peimbert y á la que hace referencia al Sr. D. Gustavo Gravenhorst.

Mas siendo que el anticipo en sueldos es un abuso punible, según el texto terminante del reglamento ya citado, el Promotor fiscal pide se les imponga á los procesados la correspondiente pena por el anticipo de sueldos que se hizo al ex-administrador Espinosa y al cartero Emigdio Herrera, según está comprobado con la confesión de

los responsables y las constancias del sumario

Morelia, Enero 22 de 1873. *Mariano de Jesus Torres*

Es copia que certifico. Morelia Mayo 2 de 1873. *Isidro Aleman*, secretario

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Abril 28 de 1873.—Vista esta causa instruida contra Antonio Espinosa y Francisco Lopez Páramo por el delito de peculado; las diligencias del sumario; la confesión con cargos hecha á los reos y sus respuestas; las pruebas rendidas por su defensor; lo alegado por este, y lo pedido por el ciudadano Promotor; la citación para sentencia y cuanto mas convino; y

Considerando; Primero: que á los reos Antonio Espinosa y Francisco Lopez Páramo se hizo el cargo de peculado fundándolo en primer lugar, en haberse encontrado un deficiente de ciento cuarenta y ocho pesos veintidos centavos en la caja de la oficina de Correos de esta capital, en la que uno fungia como administrador y el otro como interventor; en el reconocimiento practicado por el ciudadano Juez propietario de Distrito el día 18 de Setiembre último, según se vé en la acta de fojas una; en segundo lugar, en que al cortarse la caja en el expresado reconocimiento y en el que por órden del juzgado de Distrito practicó el oficial encargado de la Gefatura de Hacienda, figuró como existencia una libranza girada por el administrador de correos de Zacapu á favor del C. Antonio Espinosa, administrador de correos, y á cargo del C. Lic. Antonio Carranza quien la aceptó, cuya libranza no apareció ya en el corte extraordinario de caja practicado para hacer entrega de la oficina de correos á los empleados nombrados provisionalmente por el ciudadano Juez propietario de Distrito, pues en él se presentó en numerario el valor de aquella; y en tercero y último lugar, en la anticipación que

por cuenta de sueldos se hizo el administrador D. Antonio Espinosa de ciento setenta y cuatro pesos y al cartero de diez.

Segundo: que estos tres hechos resultan perfectamente comprobadas por el reconocimiento y cortes de caja referidos, por el estado comparativo practicado por el jefe superior de hacienda por orden del juzgado de Distrito y visible á fojas 48 y 49 de la causa y por la confesion de los reos, que aceptando como ciertos los hechos, procuraron solo explicarlos para atenuar ó hacer desaparecer su culpabilidad, como se vé en sus preparatorias y en sus respuestas á los cargos que se les hicieron.

Tercero: que tales exculpaciones no lo son propiamente, porque los caudales pertenecientes á la renta, debieron constantemente guardarse en caja de dos llaves, conservando una el administrador y otra el interventor, conforme al artículo primero capítulo primero título 13 de la ordenanza del ramo, porque el anticipo de sueldos está expresamente prohibido por el artículo 200 del reglamento de las oficinas de Hacienda, expedido por el supremo gobierno nacional, como que esos anticipos no son otra cosa que un medio de paliar la inversion de los caudales públicos en usos particulares y extraños á su objeto; y por ultimo, porque aun suponiendo cierto que el C. Luis Bonilla que por mandato y en presencia del ciudadano Juez propietario hizo las operaciones correspondientes al reconocimiento constante en la acta de fojas una, y el oficial encargado de la gefatura de hacienda al practicar el corte de caja de fojas cuatro, hubiesen tomado como documento de data la libranza de ciento cincuenta pesos á cargo de Carranza sin que la hubiesen presentado ni el administrador Espinosa ni el interventor Páramo; tal hecho no les exculparía, en virtud de que al suscribir sin observacion ni protesta el corte referido de caja, hicieron suyas las operaciones practicadas por el oficial encargado de la Gefatura de Hacienda.

Cuarto: que esa misma libranza se repu-

ta, ó como encargado su cobro particularmente al Sr. Espinosa, ó como perteneciente á la renta, en virtud de haberla remitido para hacer un entero la administracion subalterna; y en el primer caso se percibe con claridad, que se presentó por los acusados ó se dejó figurar como existencia en caja, para ocultar el deficiente de ciento cincuenta pesos, que sobre el de ciento cuarenta y ocho debió aparecer en el reconocimiento de fojas una y en el corte de fojas cuatro; y en el segundo, debió figurar en el cargo para que pudiese en seguida tomarse como existencia, resultando balanceado su valor, y por consecuencia de manifiesto, que habia un faltante en caja de la misma cuantía.

Quinto: que aunque se ha dicho por los acusados que este valor existía en union de los ciento cuarenta y ocho pesos veintidos centavos en una pieza de la casa de correos y en una arca particular del Sr. Espinosa, esta aseveracion se contradice con lo expuesto por el interventor en su declaracion de fojas diez, en que terminantemente expresa que recibió ciento sesenta pesos y no doscientos noventa y ocho pesos veintidos centavos que debieron ser, suponiendo cierto que los ciento cincuenta que se suplieron con la libranza habian sido extraídos de la caja de la oficina y guardados en arca particular por el administrador, para mayor seguridad y mejor salvar la responsabilidad que debia reportar durante su licencia.

Sesto: que el artículo 1,026 del código penal, declara reo de peculado á todo el que encargado de un servicio público, distrae de su objeto dolosamente el dinero ó cualesquiera otros bienes que por razon de su encargo ha recibido en administracion, y que la palabra dolosamente, como que se refiere á un acto interno, debe calificarse por lo que de suyo dan los actos externos, teniendo en cuenta las disposiciones legales, é inconcusamente obra con dolo el empleado que á sabiendas infringe los deberes especiales de su encargo, practicando actos que las leyes le prohiben, y en el caso ni aun puede ale-

garse ignorancia, supuesta la circular de 12 de Enero de 1872 y ley de indias en ella citada; y por último, que el artículo 1,028 del mismo código castiga con prision, multa, destitucion de empleo ó inhabilitacion perpetua para obtener otro del mismo ramo, y de diez años para los de ramo diverso á los reos de peculado, y que el 1,030 reduce la pena á arresto menor, destitucion de empleo, inhabilitacion perpetua para otro del mismo ramo y por diez años para los de ramo diverso, cuando el reo devuelve lo sustraído dentro de los tres dias siguientes á aquel en que se descubrió el delito, lo cual se hizo en el presente caso, debia de fallar y fallo: son reos de peculado los acusados Antonio Espinosa y Francisco Lopez Páramo; y en consecuencia, y por haber devuelto las cantidades que de la administracion de correos distrajeron de su objeto, los debia de condenar y condeno, conforme á los artículos 1,028 y 1,030 del código penal, á la destitucion de sus empleos de administrador é interventor de la oficina principal de esta capital, á inhabilitacion perpetua para otro empleo ó cargo del mismo ramo, y por diez años para los de ramo diverso, dando por extinguida la pena de arresto menor, de que tambien son dignos, con el sufrido en cumplimiento del auto motivado de prision, fulminado en su contra en 25 de Setiembre de 1872. Notifiquese este fallo; remítase copia de él al Semanario Judicial, y elévose la causa al Tribunal de Circuito para su revision. El C. Lic. Jacobo Ramirez, juez segundo suplente de Distrito, por recusacion del propietario y primer suplente, así lo decretó y firmó definitivamente juzgando. Doy fé.—*Lic. Jacobo Ramirez.*
—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 2 de 1873.—*Isidro Aleman*, secretario.

*Pedimento del C. Promotor fiscal
del Tribunal de Circuito.*

C. Magistrado de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que en 18 de Setiembre del año próximo pasado, el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan practicó un corte de caja extraordinario en la Administracion principal de correos de Morelia, á fin de justificar la estraccion de los sellos de la antigua emision, remitidos por las oficina subalteras de Zacapu, Quiroga, Eronguáricaro, verificada el 26 de Mayo, al ser robada en el punto de la *Verdolaga* la diligencia que conducia la balija de Patzcuaro, y en la que venian los sellos referidos. El C. Juez pidió al interventor de la oficina el libro de caja, y presentado que este fué, se practicó el corte respectivo por el C. Luis Bonilla, nombrado al efecto, dando por resultado una existencia de novecientos veintiocho pesos setenta y ocho cents, (\$928 78). Intimado el interventor D. Francisco López Páramo para que la exhibiera, entregó ciento diez y ocho pesos cuarenta y dos cents (\$118. 42) en efectivo, veinticinco pesos (\$25. 00) en recibos de correos ordinarios, ciento setenta y cuatro pesos noventa y ocho cents. (\$174. 98) en iguales documentos del Administrador principal D. Antonio Espinosa, á la sazón ausente y con licencia, treinta y tres pesos diez y seis cents. (\$33. 16) en recibo del mismo interventor, otro del oficial segundo valor de nueve pesos cincuenta cents. (\$9. 50), otro del cartero por quince pesos (\$15. 00), otro del portero por cuatro (\$4. 00), otro del visitador por ciento doce (\$112. 00), otro á cargo del C. Pedro Echeverria por trece pesos cincuenta cents. (\$13. 50), una carta orden á cargo de D. Antonio Carranza por valor de ciento cincuenta pesos (\$150. 00) y un libramiento á favor del C. visitador por valor de ciento veinticinco pesos (\$125. 00), cuyas sumas forman la de setecientos ochenta pesos cincuenta y seis cents. (\$780. 56). Asi resultó un déficit de

ciento cuarenta y ocho pesos veintidos cents. (\$148. 22).

El C. Juez notó que el Administrador D. Antonio Espinosa se adelantó el sueldo de todo el mes de Setiembre, y tomó setenta y cuatro pesos noventa y ocho cents. (\$74. 98) á cuenta del siguiente mes, y que al cartero se habían también adelantado cinco pesos (\$5. 00) del mes de Octubre, además del adelanto de la segunda quincena de Setiembre.

En 20 del mismo mes en que se practicó la diligencia referida, se volvió á practicar otro corte de caja por la propia oficina; resultando trescientos un pesos en dinero efectivo (\$301. 00) y una libranza á cargo de D. Antonio Carranza con su aceptación, por valor de ciento cincuenta pesos (\$150. 00).

Así se integró la suma de setecientos setenta y ocho pesos (\$778. 00), cargo y data de esta operación.

Se practicó el tercer corte de caja de 26 de Setiembre, en el que por devoluciones se integró el descubierto. Así es que según el balance practicado por el C. Gefa superior de Hacienda en 18 de Setiembre, había un descubierto de trescientos setenta y tres pesos veinte cents. (\$373. 20), en 20 del mismo era de ciento cincuenta pesos (\$150. 00), y en 26 no había descubierto alguno. En consecuencia, el cargo lo constituyen los hechos siguientes:

Primero: El deficiente en numerario de trescientos setenta y tres pesos veinte cents. (\$373. 20), que está comprobado por el reconocimiento judicial de la foja primera y estado comparativo de fojas 48, pues aún que según el C. Juez de Distrito solo faltaban ciento cuarenta y ocho pesos veintidos cents (\$148. 22) y conforme á la opinión de la Gefatura faltaba aquella cantidad, esta diferencia se explica porque la Gefatura no admitió en caja como existencia los documentos que á continuación se expresan: el recibo de Espinosa por valor de setenta y cuatro pesos noventa y ocho cents. (\$74. 98); el de diez (\$10) del cartero, á

la vez que abonó otra pequeña suma, sin haber considerado la libranza de ciento cincuenta pesos á cargo de Carranza. Esta libranza no apareció en 18 de Setiembre. Espinosa declara que era un documento privado fiado á él en lo particular. Bien examinado este punto, y si hubiera aparecido desde un principio en la caja, sería un documento de cargo y no de data, porque entonces figuraría como valor del que se desprendió la Administración subalterna de Cotija en favor de la principal, y como remisión de fondos hecha por la primera á la segunda.

Segundo: El descubierto de ciento cincuenta pesos (\$150) que apareció en el corte de caja practicado el día 20 de Setiembre, en el que aunque aparece igual el cargo con la data, consiste en que figura como existencia la libranza de D. Antonio Carranza con su aceptación por ciento cincuenta pesos (\$150). Y esto se entiende haciendo una benigna interpretación, considerando la letra como documento privado confiado á Espinosa y extraño á la Hacienda pública; pues que si de esta fuera, atendiendo á su procedencia, debía considerarse como documento de cargo, lo que daría por resultado, que el resultado fuera entonces de trescientos pesos (\$300).

Tercero: El hecho de haber desaparecido de la caja la citada libranza en el corte de caja hecho el 26 del mismo mes, en el que resultó cubierta, faltando su valor en el cargo, en el que debiera haber figurado.

De estos hechos son responsables el Administrador de correos D. Antonio Espinosa y el interventor D. Francisco Lopez Páramo, que reintegraron el descubierto en los pocos días que mediaron entre el 18 y 26 de Setiembre de 1872.

El delito de malversion de caudales que cometen los empleados públicos, es de mucha gravedad y trascendencia, ya por los efectos que produce, ya por la inmoralidad que supone el acto de aplicar indebidamente á usos propios y ajenos lo que está destinado á otros objetos, y ya por el abuso

indigno que hacen de la confianza depositada en ellos. Este delito aunque solo puede ser cometido por empleados públicos, el artículo 1026 del Código penal lo extiende aún á personas que están en comision y no tengan el carácter de funcionarios, que para sus usos privados distraen de su objeto dolosamente el dinero, valores, fincas ó cualquiera otra cosa perteneciente á la Nación, sin que sirva de excusa el haber hecho la distraccion con ánimo de devolver aquello de que dispuso (artículo 1027).

No solamente comete este delito el que sustrae, sino tambien el empleado que consintiere en la sustraccion, pues que no habiendo podido cometerse este delito sin aquiescencia suya, debe ser castigado como cómplice (artículo 50 fraccion 5ª del Código penal.) Conforme al artículo 1030 del mismo, cuando se devuelve despues de tres dias la cantidad sustraída, la pena se reduce á una tercera parte. El 1028 proviene, que cuando el valor de lo sustraído pase de cien pesos sin llegar á quinientos, se imponga la pena de uno á dos años de prision. Así pues, en el caso, el Administrador Espinosa mereció la pena de cuatro meses de prision y la destitucion de empleo perpetua para obtener otro en el mismo ramo, y por diez años para los de ramo diverso, pues la reduccion de pena se refiere solo á la corporal, (artículos 1028 fraccion 2ª y 4ª, y 1030 del Código penal.)

Al cómplice se le castiga con la mitad de la pena que se impone al autor (artículo 219), y á Páramo debe considerarse con aquel carácter. El interes que tomaron los acusados para reintegrar á la Hacienda pública de la cantidad sustraída, así como la circunstancia de distar esta mucho de quinientos pesos, son cosas que deben tenerse presentes para aplicarles el minimum de la pena.

En el pedimento fiscal de primera instancia, no concluye el Ministerio público con proposiciones terminantes y precisas, sino pidiendo la pena correspondiente sin deter-

TOMO IV.—PARTE II.

minarla; por lo que debe decirse al C. Juez, que lo haga presente al C. Promotor que en lo sucesivo cuide no solo de extractar los hechos y exponer el derecho que en su concepto les sea aplicable, sino tambien que precise sus pedimentos concluyéndolos con proposiciones que contengan la pena correspondiente al caso en que formule acusacion.

En vista de lo expuesto, el Promotor fiscal pide; primero: que por sus propios legales fundamentos se confirme la sentencia de primera instancia, dando por compurgado á D. Antonio Espinosa con los padecimientos sufridos, y condenándolo ademas á las penas de destitucion de empleo é inhabilidad perpetua para obtener otro en el ramo de correos, y por diez años en otro diverso; segundo: que se revoque por lo que toca á D. Francisco Lopez Páramo, imponiéndole la pena de destitucion de empleo, é inhabilidad para obtener otro durante cinco años en el mismo y en distinto ramo, dándolo ademas por compurgado.

Querétaro, 18 de Junio de 1873.—*Luis Castañeda.*

Es copia que certifico. Querétaro, 30 de Setiembre de 1873.—*Ramon Reynoso*, secretario.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Querétaro, Junio 27 de 1873.—Vistos: el C. juez de Distrito de Morelia, se presentó la mañana del 18 de Setiembre del año próximo pasado, en la oficina de correos de esa Ciudad con objeto de intervenir en el corte de caja que debió practicar á causa de la extraccion de sellos remitidos por las oficinas subalternas de Zacapu, Quiroga y Eronguarecuaro, que tuvo lugar el dia 26 de Mayo, al ser robada la diligencia en el Punto de la "Verdolaga," que conducia la balija de Patzeuaro y en la que se hallaban los sellos mencionados, lo que dió motivo para el recuento y diligencias subsiguientes con vista de los libros de caja, prac-

ticándose la operacion oficial por el C. Luis Bonilla, nombrado al efecto, y con asistencia del interventor, que puso de manifiesto todo lo conveniente á los fondos de la oficina, para que tuviese efecto la cuenta que se solicitaba. Practicados los cortes de caja en los dias 18, 20 y 26 de Setiembre citado, dió por resultado el primero, una existencia por valor de novecientos veintiocho pesos, setenta y ocho centavos, que se exhibió en dinero y en distintos documentos de pagos hechos á los empleados subalternos, interventor, visitador y administrador de la oficina, juntamente con una carta orden á cargo del C. Antonio Carranza, todo lo cual importó la cantidad de setecientos ochenta pesos cincuenta y seis centavos, dando en tal virtud el déficit de ciento cuarenta y ocho pesos veintidos centavos, cantidad necesaria para cubrir la que expresaban los libros, cuyo deficiente se aumentó por no datarse algunas partidas puestas en los documentos concernientes á los empleados por los adelantos que se les hicieron, ni el de la carta orden segun se refiere en el estado de fojas 48 frente, en el que bajo la palabra "Demostracion," resultó el déficit de la cantidad de trescientos setenta y tres pesos, setenta centavos, fojas 49 frente, á la vez que en el segundo corte de caja que tuvo lugar el dia 20 de Setiembre, segun se ha dicho, faltó la cantidad de ciento cincuenta pesos, por no datarse la letra de su valor, cuya cantidad fué entregada lo mismo que las otras que faltaran y de que se ha hecho mérito por los empleados de la oficina de correos, con lo cual se integró el descubierta, segun aparece en el último corte de caja practicado al entregarse la oficina el 26 de Setiembre á los empleados nombrados por el Juez, en sustitucion de las personas que manejaron los fondos de la administracion segun se ha dicho, y por cuyo desfalte fueron procesados el Administrador D. Antonio Espinosa, de cuarenta y siete años de edad, empleado, y el interventor D. Francisco Lopez Páramo, de cuaren-

ta y tres años, médico, ambos casados y vecinos de Morelia, á cuyos individuos se les hicieron los cargos respectivos fundados en los hechos expuestos. Visto todo lo actuado y probado, así como todo lo demás que aparece en el proceso, tiene que considerarse:

Primero: que en la causa se probó legalmente la no existencia de la cantidad pecuniaria que se extrañó en el primer corte de que se ha hecho mérito, cuya prueba resulta de la confesion de Páramo, que expresó no habia mas dinero en la caja, de cuyo deficiente no dió explicacion, fojas primera vuelta, sin que baste ni se estime como exculpacion, lo de que el dinero se hubiese alzado por el Administrador del ramo, para cubrir su responsabilidad en caso de robo, extraccion de caudales, como efecto de azonada, en razon que la responsabilidad era mancomunada con la del interventor, segun lo expresa el art. 39, cap. primero, tít. doce de las Ordenanzas de Correos; porque el dinero y lo que le es relativo, debia hallarse en la caja asegurado con dos llaves, ó en los términos que expresa el art. primero, cap. primero, tít. trece de las Ordenanzas citadas, y la suprema circular de 12 de Enero de 1872, que declaró vigente la real Orden de 14 de Mayo de 1807, estensiva á la pena que merece el empleado que tome los fondos públicos, aunque sea sin animo de apropiárselos, ó de devolverlos, art. 1027 del Código penal, que evita subterfugios ó escepciones como la aducida por Espinosa, concerniente á la causa de no hallarse el dinero en caja.

Segundo: que así mismo consta por confesion de los reos, el desfalte de que se ha hecho mérito en lo relativo á los adelantos de sueldo, que se hizo el administrador, extensivos á otros empleados, contra lo prevenido en el artículo 200 de la ley de 20 de Junio de 1831: que disminua la existencia de la caja, pues si bien es cierto que los abonos se hacen en lo general á cuenta de sueldos, esos constituyen hechos y son sin perjuicio del corte de caja mensual que de-

be ser completo, porque sirve para la cuenta general y mancomunada con las que llevan las oficinas superiores, como porque admitida la escepcion que se adujo sobre el particular, destruiria entonces el medio de averiguacion relativo á desfalco de caudales públicos, razon porque no ha podido aceptarse como data que completase el fondo de la caja, los documentos recibos de que se ha hecho mérito, que deben guardar concordancia con las partidas relativas á los libros, con la particularidad que no consta se hiciesen en ellos los asientos, ó que en su caso se enmendara la partida al hacer Espinosa la revolucion de lo que habia tomado, en contravencion á la ley, é incluido en consecuencia, y por lo demas expuesto en el párrafo precedente, en lo prevenido en el artículo 1026 del Código penal.

Tercero: Que el desfalco se corrobora con la misma libranza girada contra el C. Antonio Carranza, cuya letra fué tomada con aquiescencia y sin observancia por parte del interventor en el corte de caja practicado el 18 de Setiembre de 1872, en razon de que estimado como documento particular, no formaba cuenta de fondo público y entonces no debió presentarse en el corte enunciado; de manera, que habiéndose presentado, fué con el engaño á que se refiere la fraccion segunda artículo 45 del Código penal, sin que pudiera datarse, segun el precepto del artículo 112 de la ley de 20 de Julio ya referida, ni tomarse como documento de cargo, porque entonces habria resultado mayor el desfalco y mas grave la responsabilidad de los reos, sobre cuyo particular se reproducen los razonamientos del C. Juez de primera instancia de Morelia en su tercero y cuarto considerando de su sentencia definitiva, (fojas 118 frente y vuelta.)

Cuarto: que lo expuesto en el párrafo precedente tiene por adminículo el acto de haber desaparecido la libranza enunciada, sin conocimiento del Juez ni de los nuevos empleados de la oficina, poniendo en la caja

su valor, lo mismo que el que correspondia á los sueldos adelantados, lo que dió por resultado fuese igual el cargo con la data en el balance practicado el día 16 de Setiembre del año próximo pasado; á pesar de lo cual, no quedaron los reos exentos de la responsabilidad en vista de lo antes expuesto en el cuerpo de esta sentencia y en lo determinado en los artículos 1030, fraccion cuarta, artículo 1028, fraccion quinta, artículo 50 y artículo 219 del Código criminal.

Considerando: que si en la causa se indicaron otros puntos de criminalidad que resultasen contra los reos en lo que respecta á su manejo de caudales públicos, como el que se refiere relativo á la libranza girada á favor de D. Gustavo P. Giavenhorst, á la vez que el concerniente al documento del C. Clemente Peimbert y sobre no completo pago de ochenta pesos que recibió la administracion de correos de Tacámbaro, esos puntos de criminalidad fueron destruidos por los reos y su defensor, mediante los documentos de justificacion presentados en el tiempo concedido al efecto.

Por todo lo expuesto, de conformidad en parte con lo pedido por el C. Promotor fiscal y mediante los fundamentos expresados, fallo: Primera: por delito de peculado se condena á D. Antonio Espinosa á cuatro meses de arresto menor, contados desde la fecha en que se pronunció la sentencia de primera instancia; á la destitucion del empleo ó inhabilidad perpetua para obtener otro en el ramo de correos, y por diez años en otro diverso. Segunda: por complicidad en el delito referido, se da por compurgado á D. Francisco López Páramo, con el tiempo que ha sufrido de prision; á la destitucion de su empleo ó inhabilitacion para obtener otro durante cinco años, en el mismo ramo y en otro distinto. Y quedando revocada la sentencia que pronunció el C. Juez segundo suplente de Distrito de Morelia á 28 de Abril del presente año, notifiquese y sin ejecutar, remítase esta causa á la Corte Su-

prema de Justicia para su revision, consecuente con lo prevenido en el artículo 33 de la ley de 14 de Febrero de 1826; y al efecto, líbrese oficio al C. Juez enunciado, con insercion de esta sentencia para que la notifique á los reos, previniéndoles nombren defensor para la tercera instancia, presentándoles en su caso, lista de los abogados que tienen esa mision en la Capital de la República; ponga en libertad á Páramo, mediante la fianza carcelera, ó comentariense, y sugeto á las resultas del juicio, lo mismo que á Espinosa y con igual requisito, luego que extinga los cuatro meses de su condena; cuyas diligencias relativas se remitirán para agregarlas á la causa como se verificará; y por cuanto constar al personal del Tribunal la eficacia que ha tenido el C. Lic. José María Burgos en el despacho de los negocios criminales que se le han encomendado de oficio, no se le hace demostracion por su falta, consistente en haber entorpecido la secuela del proceso, no devuelto con la defensa en el término legal, y solo si se encarga á aquel letrado, que en lo sucesivo sea mas activo al desempeñar la honrosa mision que se le confia, ya que está obligado en favor de los presos.

El C. Magistrado de Circuito, así lo decretó y firmó.—Doy fé.—*Aurelio Rdmis Portugal—Ramon Reynoso.*

Es copia que certifico.—Querétaro, Setiembre 30 de 1873.—*Ramon Reynoso,* secretario.

Edicto del C. Procurador General de la Nacion.

El Procurador general de la Nacion dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Michoacan se siguió causa contra D. Antonio Espinosa y D. Francisco López Páramo, administrador principal el primero é interventor el segundo de Correos, por delito de peculado. La causa ha tenido dos instancias; y tanto en la sentencia de

primera como en la de segunda, se ha hecho una relacion exacta y minuciosa del delito y sus circunstancias, y una juiciosa comparacion de los preceptos legales que deben regir en el presente caso. Por la consideracion expresada, el Procurador general cree inútil hacer una nueva relacion de los autos; y se refiere en un todo á las partes expositivas de dichas sentencias; pero tiene que fijar su atencion en la diferencia sustancial que existe entre las partes resolutivas; la de primera instancia condena, tanto á Espinosa como á López Páramo, á la destitucion de sus respectivos empleos; á inhabilidad perpetua para obtener otro en el mismo ramo y á inhabilidad por diez años para los de ramo diverso; en cuanto á la pena de arresto menor, la da por extinguida, con el que han sufrido desde el auto motivado de prision. La sentencia de segunda instancia está conforme de toda conformidad, con la de primera respecto de López Páramo; lo está tambien respecto de Espinosa en cuanto á la destitucion é inhabilidad; pero establece diferencia en cuanto al arresto, pues á mas del que ha sufrido le impone otro de cuatro meses, contados desde la fecha en que se pronunció la sentencia de primera instancia. No cabe duda, en que Espinosa y Páramo incurrieron en la misma responsabilidad, y así lo reconoce el Magistrado de Circuito al asegurar "que la responsabilidad (del administrador) era mancomunada con la del interventor, segun lo expresa el artículo 39 capítulo primero tit. 12 de las ordenanzas de correos". Esto supuesto, no hay razon para establecer diferencia en la pena que cada uno debe sufrir. A juicio del que suscribe, la imputada, por el Juzgado de Distrito es mas que suficiente; porque el delito no tiene en sí una exesiva gravedad, porque ademas hay circunstancias que muy bien pueden calificarse de atenuantes, y porque en fin, la destitucion y la inhabilidad, son ya por sí solas penas demasiado graves.

Por tales consideraciones, el Procurador

general concluye pidiendo, que revocada la sentencia de vista en la parte que impone cuatro meses de arresto menor á D. Antonio Espinosa, se confirme en todas sus partes la de primera instancia. México, Julio 18 de 1873.—*L. Guzman.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Setiembre 10 de 1873. Vista la causa instruida contra D. Antonio Espinosa y D. Francisco López Páramo por peculado. Vista la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Michoacan en 28 de Abril último, y por la que se falló condenando á los encausados á la pena de destitucion de sus respectivos empleos de administrador el primero y de interventor el segundo de la oficina principal de correos de dicha ciudad é inhabilitacion perpetua para obtener otro empleo ó encargo en el mismo ramo, y por diez años para los de ramo diverso: dando por extinguida la pena de arresto menor, de que tambien son dignos, con el sufrido en cumplimiento del auto motivado de prision fulminado en su contra en 25 de Setiembre de 1872. Vista la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Querétaro en 27 de Junio próximo pasado, que revocando en parte la de su inferior falla:

Primera: Por delito de peculado se condena á D. Antonio Espinosa á cuatro meses de arresto menor, contados desde la fecha en que se pronunció la sentencia de primera instancia; á la destitucion de empleo, é inhabilitacion perpetua para obtener otro en el ramo de correos y por diez años en otro diverso.

Segunda: Por complicidad en el delito referido, se dá por compurgado á D. Francisco López Páramo con el tiempo que ha sufrido de prision, á la destitucion de empleo é inhabilitacion para obtener otro du-

rante cinco años en el mismo ramo y en otro distinto.

Visto lo pedido ante esta Sala por el Sr. Procurador General, con todo lo demás que de autos consta, ver convino y se tuvo presente:

Considerando: que de las constancias de la causa resulta plenamente probado, que D. Antonio Espinosa y D. Francisco López Páramo son reos del delito de peculado, definido en el art. 1,026 del Código penal y de cuyo delito se les hizo cargo; que la pena que debe imponérseles á uno y otro ha de ser la misma, atendiendo á que la responsabilidad que han contraído al delinquir es mancomunada, segun la disposicion expresa del art. 39 cap. 1º tít. 13 de las ordenanzas de correos, que hablando de las obligaciones del oficial interventor, dice: en inteligencia de que será responsable de mancomuné insolídum, con el Administrador, de cualquier estravio ó falta que se experimente así en la omision de no poner conforme vayan callendo los productos en la arca de dos llaves, como por otro cualquier motivo; que segun la fraccion 2ª del art. 1,028 del Código citado, el delito de peculado se castiga con uno ó dos años de prision, y multa de cien á quinientos pesos cuando el valor de lo sustraído pase de cien pesos, pero no de quinientos como ha sucedido en el presente caso; pero cuya pena se modifica en virtud del art. 1,030 del mismo Código, por la circunstancia atenuante de haberse devuelto, antes de los tres dias siguientes al en que se descubrió el delito, el desfalco que se encontró en la caja de la administracion, segun constancias de la misma causa, debiendo entonces reducirse la pena á la de arresto menor, el cual debe reputarse compensado con el tiempo de prision que han sufrido los encausados; y en consideracion á que ademas de esa pena y no obstante la devolucion de lo distraído, es de imponérseles tambien la de destitucion del empleo ó cargo, é inhabilitacion perpetua para obtener otro en el mis-

mo y por diez años en los de ramo diverso, frac. 4ª. del art. 1,028, y última del 1,030. Considerando por último: que los defensores Lic. D. Manuel Prieto y D. Francisco T. Gordillo, nombrado el primero por D. Francisco López Páramo y el segundo por D. Antonio Espinosa, no se han presentado ante esta Sala á patrocinar á sus respectivos reos, como cumplia á su oficio.

Se decreta de conformidad con lo pedido por el Sr. Procurador General, que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Morelia en 28 de Abril próximo pasado, que condena á los procesados D. Antonio Espinosa y D. Francisco López Páramo, á la destitucion de sus empleos de administrador é interventor de la oficina principal de Correos de la Ciudad de Morelia, á inhabilitacion perpetua para otro empleo ó encargo del mismo ramo, y por diez años para los de ramo diverso, dando por extinguida la pena de arresto menor de que tambien son dignos, con el tiempo que sufrieron de prision á consecuencia del auto motivado de ella y que fué pronunciado en 25 de Setiembre de 1872.

Se hace una seria advertencia á los expresados Lics. Prieto y Gordillo, para que en lo de adelante sean mas exactos en el cumplimiento de su deber.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 3 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial mayor.

COMPETENCIA.

Promovida por el Juzgado 2º de Distrito de esta Capital al 3º de lo civil de la misma, para conocer del incidente que ha ocurrido en los autos seguidos por D. Julio Robreau contra D. Santiago Richard, sobre pesos.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que el año de 1866, D. Julio Robreau, siguió ante el Juzgado cuarto de instruccion del ramo civil, encargado de los negocios de Hacienda, un juicio contra D. Santiago Richard, demandándole el pago de tres mil pesos y sus réditos correspondientes. La obligacion en que constaba el débito ó sea la obligacion personal del deudor, está extendida en una hoja de papel del sello tercero de act. acciones, de á cuatro reales. Bajo esta circunstancia, los autos fueron corriendo sus diversos trámites en la vía ejecutiva, hasta el punto de haberse pronunciado en diversas ocasiones autos de exequendo; ya para la traba de la ejecucion primera, ya para su mejoramiento despues. Por fin, en 9 de Enero próximo pasado, se presentó D. Julio Robreau, por medio de un apoderado ante el Juez segundo de lo civil de esta Capital y á cuyo conocimiento habia llegado este negocio, promoviendo ciertas diligencias; mas habiendo cambiado el personal del juzgado por ese tiempo, el demandado recusó al nuevo juez, pasando entonces los autos al tercero de la misma Capital.

Radicalos ante esto, Robreau se presentó á continuar el pleito pendiente, al cual recayó el auto de fecha 8 de Marzo último, que se registra á fojas 60 vuelta del cuaderno principal. Dicho auto dice á la letra: "compúlsese, por el actuario, testimonio del documento de fojas 1, cuaderno primero de estos autos, del informe anterior y presente decreto, para que se forme y siga por cuerda separada el punto de la infraccion